

Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En estos autos Rol C-30.448-2017 del Primer Juzgado Civil de Rancagua, sobre cobro de prestaciones e indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, caratulados “Mol Ambiente S.A. con Codelco Chile”, mediante sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veinte se desestimó la demanda, sin costas.

La actora impugnó lo resuelto mediante recursos de casación en la forma y apelación y el tribunal de alzada de esa ciudad, en pronunciamiento de cuatro de mayo de dos mil veintidós, rechazó el recurso de nulidad y revocó lo decidido, acogiendo la demanda y condenando a la demandada al pago de las sumas que indica, a título de prestaciones adeudadas por servicios realizados y por concepto de indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral, con incrementos que indica, sin costas.

En contra de esta sentencia, la parte demandada interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de casación en la forma.

PRIMERO: Que la recurrente asevera que la sentencia incurre en las causales de nulidad previstas en los numerales 4° y 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a lo primero, arguye que el fallo incurrió en el vicio de extra petita, extendiéndose a puntos que no fueron sometidos por las partes a la decisión del tribunal.

Afirma que los raciocinios que desarrollan los juzgadores para concluir que su parte habría ejercido de manera arbitraria, intempestiva, irracional, injusta y abusiva la facultad de término unilateral anticipado del contrato sin expresión de causa en perjuicio de la actora, son materias que se alejan de la discusión y lo que se debatió en juicio.

Ello, porque el argumento fundamental en el que la actora articuló su pretensión decía relación con la inaplicabilidad de la cláusula de terminación anticipada de contrato que Codelco esgrimió. Esa atribución está contenida en la cláusula 30° de las Bases Generales Administrativas (BGA), pero la cláusula 6° del contrato establece que su plazo de duración era de 48 meses y que las



modificaciones al contrato debían ser pactadas de común acuerdo. Esta discordancia, al decir de la actora, debía ceder a favor del texto contenido en el contrato, que derogó aquella facultad prevista en las bases administrativas generales.

Por su parte, Codelco señaló que no existía tal incompatibilidad y que la terminación anticipada no importaba una modificación del contrato, sino el uso de un derecho consagrado expresamente en él.

De este modo, expresa que en la alegación de la demandante no hay referencia a un supuesto ejercicio abusivo de un derecho por parte de Codelco, o que la terminación anticipada se habría ejercido de manera arbitraria, injusta o irracional, como declara la sentencia recurrida en su considerando décimo octavo, olvidando que el objeto del juicio no es otro que la determinación de si la facultad de Codelco de poner término anticipado unilateralmente al contrato, contenida en el numeral 30 de las Bases, resultaba aplicable a este caso concreto.

Es esa la cuestión que circunscribe la competencia para fallar la disputa y no el aspecto sobre el que discurre la sentencia, en tanto la discusión propuesta por la demandante no se refería a si la decisión de Codelco fue fundada, si los motivos esgrimidos para ello eran “racionales”; si los hechos en los que se fundó la terminación -profundas desavenencias en la interpretación del Contrato- eran efectivos o no, el alcance de aquellos hechos, o, en fin, si el ejercicio de la facultad contractual en cuestión habría sido arbitraria o injusta.

Y como esas cuestiones se alejan de la controversia, tampoco fueron recibidas a prueba, sin perjuicio de haberse incorporado elementos que demuestran que la decisión de terminar el contrato se encuentra debidamente fundada y se ejerció una atribución prevista para ese caso. Con todo, esas probanzas tampoco fueron analizadas en el fallo, incurriendo así en otra inobservancia grave, en tanto los jueces concluyen que la decisión de terminar anticipadamente el contrato fue arbitraria por la carencia de evidencias que podrían haber autorizado la terminación, acudiendo los jueces incluso a la teoría del “abuso del derecho”, con el objeto de construir un supuesto incumplimiento contractual de la demandada, en circunstancias que la procedencia o no de aquella institución jurídica no conforma la discusión sometida al proceso de autos.

SEGUNDO: Que, además, la recurrente asevera que el fallo incurre en el vicio al que se refiere el N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento



Civil, en relación a la exigencia prevista en el número 4 del artículo 170 del mismo texto adjetivo, lo que sucede de dos maneras.

Primero, porque en lo relativo a la determinación de los perjuicios que habría sufrido Mol Ambiente S.A., la sentencia contiene razonamientos contradictorios que se anulan entre sí, dejándola desprovista de consideraciones que justifiquen la decisión adoptada.

Señala que el dictamen de segundo grado reproduce parcialmente la de primera instancia, haciendo suyo, entre otros considerandos de esta decisión, el primer párrafo del basamento 21°, cuya numeración corregida corresponde al 19° y el 22° (20°, en su numeración corregida) en los cuales se señala que la demandante no probó la existencia de los pagos pendientes que reclama, que no es posible tener por acreditados los daños por la falta de una prueba técnica y un análisis contable, y que la documental acompañada para esos fines proviene de la propia demandante o de terceros que no la ratificaron en juicio, por lo que no es suficiente para dar por establecido el daño que se demanda ni interpretar adecuadamente las estipulaciones del contrato, en el que se han producido diferencias irreconciliables entre las partes.

Empero, en su fundamento 21° la sentencia de segundo grado concluye la efectividad de la deuda proveniente de los estados de pago, añadiendo que habrían sido reconocidos por la demandada, y en el basamento 22° da por establecido ciertos perjuicios con el mérito del informe contable que señala.

Asimismo, al reproducir el considerando 22° (20°, corregido) del dictamen de primer grado, los jueces expresan que la existencia de estados de pago pendientes no constituiría un acto arbitrario porque ello obedecería a las diferencias de interpretación respecto del precio de manejo de chatarra a comercializar. Y, sin embargo, en el basamento 17° de la sentencia recurrida los juzgadores califican de intempestiva o abusiva la decisión de la demandada de poner término anticipado al contrato debido a que la comunicación de esa decisión no indicaría las desavenencias habidas entre los contratantes.

En segundo lugar, afirma la impugnante que la sentencia únicamente analiza la prueba pericial, sin ocuparse, examinar y ponderar las demás probanzas producidas en primera instancia, omisión que, entonces, hace imposible asentar los hechos que, en perjuicio de la recurrente, el fallo señala, incluso estableciendo hechos contrarios a toda la evidencia aportada, como es concluir que las actividades de comercialización de residuos industriales y



chatarra por parte de Mol Ambiente fue su motivo principal para celebrar el contrato con Codelco, que el ejercicio de la facultad de la recurrente de poner término anticipado al contrato fue arbitraria, irracional e injusta o que su parte habría creado una razonable expectativa en la demandante de que el contrato seguiría ejecutándose por el plazo originalmente estipulado. Lo mismo acontece en el establecimiento de los montos que por lucro cesante y daño moral que se ordena pagar, todas cuestiones que carecen de fundamentos.

TERCERO: Que respecto del primer motivo de impugnación formal, esta Corte ya ha asentado que el defecto de ultra petita se configura cuando la sentencia, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir.

Luego, para dilucidar si en el fallo objetado que acogió la acción existe un desajuste entre lo resuelto y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, corresponde primeramente comparar lo reclamado por los litigantes con lo decidido en el fallo impugnado.

CUARTO: Que al efectuar el examen aludido entre los extremos que señala la doctrina, esto es, acción y excepción o defensa y lo decidido, se concluye que no existe discordancia alguna entre lo pedido y lo resuelto, por cuanto lo que decide la sentencia impugnada se encuadra precisamente dentro de lo que fue el asunto debatido.

QUINTO: Que, en efecto, la cuestión que los jueces han debido dilucidar se centró en la efectividad de haber incumplido la demandada el contrato de Prestación de Servicios de Recolección, Transporte y Almacenamiento, Clasificación y Disposición Final de los Residuos Industriales Sólidos Generados por División El Teniente, que el 24 de agosto de 2015 adjudicó a la actora, infracción que hizo consistir en circunstancias acaecidas durante el desarrollo de la relación contractual y que dicen relación con la falta de pago de ciertas prestaciones, así como por haber omitido Codelco ejecutar las acciones necesarias para permitir a la demandante comercializar residuos industriales.

En lo que interesa a la precisa materia a que se refiere la causal de casación esgrimida, la actora también refirió que el contrato fue incumplido por su contraparte por su decisión de ponerle término anticipado al contrato, “sin que existiera una razón fáctica ni contractual para ello”, aduciendo, en síntesis,



que de acuerdo a la convención, cualquier modificación, ya sea en su alcance, plazo o precio, debía ser acordada entre las partes, y que las únicas causales que autorizaban a Codelco para poner término anticipado al contrato son las señaladas en las cláusulas 14°, 15° y 20°, ninguna de las cuales se dio en la especie ni fueron invocadas por la demandada como causal o fundamento de su decisión de terminar el contrato.

Antes bien, se ha invocado una causal de término no prevista ni contenida en el contrato que las unió, y que consistiría en existir “profundas diferencias de interpretación del mismo entre ambas partes y que no han logrado ser zanjadas”, acudiendo a una facultad prevista en la cláusula 30° de las Bases Administrativas Generales, en circunstancias que el propio contrato prevalece sobre aquellas bases y no reconoce esa facultad de término anticipado del contrato sin expresión de causa.

Expuso además que si se estimase aplicable a la relación entre las partes la antes señalada causal de término anticipado, debía considerarse que esa atribución se refiere a una terminación sin expresión de causa y, en la especie, se invocó una causal específica, pues la comunicación alude al hecho de haber transcurrido más de un año de vigencia, el contrato referido no ha dado los resultados esperados al momento de su formulación, principalmente a raíz de profundas diferencias de interpretación del mismo entre ambas partes y que no han logrado ser zanjadas.

Respecto a la demandada, debe precisarse que se equivoca la sentencia de primer grado al estimar que su contestación fue extemporánea, obviando lo resuelto el 3 de julio de 2018, oportunidad en la que, acogiendo una reposición, se tuvo por contestado el libelo, tal como además refiere el segmento expositivo del mismo dictamen.

Al contestar, Codelco negó los hechos que sostienen la pretensión de contrario y sostuvo, en lo fundamental, la procedencia y eficacia de la terminación del contrato en virtud de la cláusula N° 30 de las Bases Administrativas Generales, que forman parte integrante del contrato, como se explicita en esa convención, de lo que colige que no existe la contradicción acusada de contrario, añadiendo que la atribución que fue ejercida en los términos acordados, que incluyen una indemnización anticipada por el cese de la relación.



SEXTO: Que, planteado de esta manera el debate relativo a la procedencia de la terminación anticipada del contrato, no se aprecia que el fallo se extienda en sus argumentaciones a aspectos que pudieran configurar el vicio de la ultra petita o que incurra en una discordancia entre lo pedido y lo resuelto, por cuanto lo que decide la sentencia impugnada se encuadra precisamente dentro de lo que fue el asunto debatido.

Efectivamente, si los jueces concluyeron que la demandada tenía la potestad para poner término anticipado al contrato sub lite, “sin expresión de motivo”, esto es, de conformidad al numeral 11 de la cláusula tercera del contrato y numeral 30 de las Bases Administrativas Generales, ambas conocidas y aceptadas por la demandante y que ello no contradice lo acordado en la estipulación sexta del contrato, necesariamente han debido pronunciarse sobre el ejercicio de esa atribución, puesto que la actora también había aseverado que aquella decisión también carecía de “una razón fáctica”.

Entonces, constatando el fallo que la cláusula de salida se había previsto para el caso de una terminación anticipada “sin expresión de causa” y que, sin embargo, sí se invocó una –esto es, como se dijo, que el contrato referido no ha dado los resultados esperados al momento de su formulación, principalmente a raíz de profundas diferencias de interpretación del mismo entre ambas partes y que no han logrado ser zanjadas-, bien podían definir si esas circunstancias ameritaban la terminación del convenio.

Distinto es que la recurrente no comparta los fundamentos que a este respecto ofrecen los jueces, los estime equivocados o sean improcedentes al caso, como sucede con ciertas expresiones que la sentencia ofrece como propias, en circunstancias que corresponden a raciocinios desarrollados por esta Corte Suprema en el fallo al que aluden los jueces y que obedecen a las particularidades de la causa que conoció y resolvió este Tribunal de Casación en aquella oportunidad.

Empero, no corresponde que esas discrepancias sean conocidas mediante el libelo anulatorio que se interpone, pues son extrañas a la causal de invalidez formal que se invoca.

En consecuencia, al emitir pronunciamiento sobre un asunto de su competencia el fallo no se aparta de los planteamientos desarrollados por las partes del juicio, resultando inconcuso, por ende, que los juzgadores han actuado dentro del ámbito de las atribuciones que les son propias por habérselas otorgado



los litigantes en sus escritos fundamentales y el ordenamiento jurídico, sin que se hayan extendido a puntos no sometidos a su decisión.

SÉPTIMO: Que, en estas condiciones, el primer capítulo del recurso no prosperará.

OCTAVO: Que en cuanto a la segunda causal de invalidación, se aprecia que la sentencia mantuvo vigente ciertos fundamentos de la sentencia en revisión, aunque modificó su numeración.

Entre ellos, el párrafo primero del original basamento 21 de la sentencia de primer grado, en la que se expresa que *“respecto de lo relativo a los Estados de Pagos que se encontrarían pendientes, la demandada niega adeudarlos, mientras que la demandante, por su parte no logró desvirtuar dicha aseveración, encontrándose radicada en ella la carga de la prueba”*, en circunstancias que en el basamento 21° del fallo de segundo grado, los jueces acceden a lo pedido a título de deuda constitutiva de un daño emergente por los estados de pago, porque la demandada habría reconocido *“montos superiores a aquellos reclamados en la demanda”*, razonamientos evidentemente contradictorios entre sí.

En similar sentido, el primitivo fundamento 22° del pronunciamiento de primer grado, que el de segunda instancia también hace suyo, manifiesta que la deuda vinculada a los estados de pago que reclama la actora tampoco sería arbitraria, porque esa discrepancia tiene como fundamento directo los documentos ya referidos y también, como establece ese considerando, por *“...las diferencias de interpretación respecto del precio de manejo de chatarra a comercializar”*.

No obstante y simultáneamente, el basamento 17° del fallo en alzada concluye que la comunicación de término de contrato *“...se funda en las permanentes y profundas desavenencias durante el cumplimiento del contrato, sin indicar cuales eran aquellas”*, y el 20° afirma que la terminación del contrato *“...carecía de la objetividad necesaria y su debida fundamentación”*, lo que transforma *“...su conducta en arbitraria y contraria a la buena fe contractual”*, racionios todos que no pueden coexistir en un discurso armónico y coherente.

Análoga desavenencia se advierte en los razonamientos expresados en el considerando 22° -el primitivo- de la sentencia de primer grado y el 22° del fallo recurrido, en tanto el primero afirma que *“no resulta posible, a falta de prueba técnica especializada, tener por acreditado el monto de los perjuicios*



demandados, máxime si se considera la abundante prueba documental acompañada cuyo análisis requiere conocimientos contables que entregue una explicación clara que no deje lugar a dudas”, y, el segundo, en cambio, recurre a una prueba pericial contable rendida en primera instancia para establecer aquellos relativos a la desmovilización del personal, camiones, equipos, maquinarias y finiquitos de los trabajadores.

NOVENO: Que la causal de casación esgrimida por la recurrente prevé, como motivo de nulidad formal, “la falta de consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia”, por cuanto sabido es que la existencia de motivaciones en una decisión constituye una garantía del debido proceso. Por esa razón, si el fallo contiene razonamientos incompatibles entre sí, como en la especie ya ha podido apreciarse, se produce una anulación de antecedentes y de raciocinio, en forma tal que la determinación que se extrae como consecuencia resulta estar claramente desposeída de motivaciones y fundamentos.

DÉCIMO: Que, en efecto, el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales –categoría esta última a la que pertenece aquella que se analiza-; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran –en lo que atañe a la materia en estudio- en su numeral 4, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

Por ello es que cumplimiento a lo estatuido por el artículo 5° transitorio de la Ley N° 3.390, de 15 de julio de 1918, que mandató a este tribunal a establecer por medio de un auto acordado la forma en que deben ser redactadas las sentencias definitivas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 170 y 785 del Código de Procedimiento Civil, esta Corte procedió a dictar el Auto Acordado sobre la forma de las sentencias, de fecha 30 de septiembre de 1920, expresando que las definitivas de primera o de única instancia y las que revoquen o modifiquen las de otros tribunales, contendrán: “5° Las consideraciones de hecho que sirvan de fundamento al fallo. Se establecerán con precisión los hechos sobre que versa la cuestión que deba fallarse, con distinción



de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquellos respecto de los cuales haya versado la discusión; 6° En seguida, si no hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, los hechos que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirvan para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales; 7° Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba producida, la exposición de los fundamentos que deben servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta en los párrafos precedentes para los fines consiguientes; 8° Establecidos los hechos, las consideraciones de derecho aplicables al caso; 9° La enunciación de las leyes o en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; 10° Tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, el tribunal observará al consignarlas el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera, y, al efecto, se observará, en cuanto pueda ser aplicable a tribunales unipersonales, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil”, actual artículo 83 del Código Orgánico de Tribunales.

UNDÉCIMO: Que en diferentes ocasiones esta Corte Suprema ha resaltado la importancia de cumplir con tales disposiciones, por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos, entre las que destaca la sentencia publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo XXV, Sección 1°, Pág., 156, año 1928.

En este contexto surge toda la distinción racional sobre lo que efectivamente constituye el fundamento del fallo por parte de los jueces, distinguiendo lo que son las motivaciones, fundamentaciones, justificaciones y argumentaciones, resolviéndose por la jurisprudencia comparada que hay ausencia de fundamento tanto cuando éste se encuentra ausente, como cuando la ausencia es parcial o son insuficientes los expresados, al igual que al existir incoherencia interna, arbitrariedad e irrazonabilidad.

Se han detenido los tribunales y la doctrina en el estudio de este requisito de las sentencias, por razones procesales y extraprocesales. Está presente, principalmente, la posibilidad de las partes de recurrir y con ello dar aplicación al "justo y racional procedimiento" que exige la Constitución Política, que en mayor medida se debe alcanzar en la sentencia, por ser la ocasión en que el Estado, por medio del órgano jurisdiccional, responde al derecho de petición y



especialmente a la acción interpuesta en el proceso, todo lo cual, sin duda, debe tener en consideración el tribunal superior al revisar eventualmente la decisión.

DUODÉCIMO: Que, entonces, del contexto de justificación que antecede queda demostrada la falta a las disposiciones y principios referidos en que incurrieron los magistrados del grado, lo que constituye el vicio de casación en la forma previsto en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el numeral 4° del artículo 170 del mismo texto legal, por la falta de consideraciones de hecho que le sirven de fundamento al fallo, correspondiendo acoger la pretensión anulatoria impetrada por la demandada, como se dirá.

DÉCIMO TERCERO: Que, por lo demás, es imposible soslayar que en el basamento 20° del fallo en revisión, los jueces expresan que la conducta de la demandada no hacía presumible la aplicación de la cláusula de cese unilateral, “...creando en la actora la razonable expectativa de que la convención se mantendría por el plazo estipulado, ya que de otro modo no se explica que la contratista hubiese...financiado con recursos propios los costos del traslado de sus instalaciones, lo que terminó de realizar un mes antes de que se le comunicara la terminación anticipada”.

Tales postulados no solo constituyen afirmaciones carentes de fundamento, en tanto no resultan explicadas en relación a probanza alguna, sino que tampoco obedecen a la realidad del proceso, pues en autos no se discutió sobre si la demandada debió trasladar sus instalaciones a un lugar distinto del que operaba y que ese traslado lo financiara con fondos propios, a diferencia de lo que acontecía en el proceso conocido por esta Corte Suprema en la causa rol N° 38.506-2017 –mencionada por el autor que cita el fallo que se revisa- cuya sentencia desarrolló idéntica afirmación a aquella que ahora es objeto de revisión.

Semejante constatación autorizaría incluso a casar de oficio el fallo en revisión, por falta de una debida fundamentación de las premisas que han sido mencionadas.

Y de conformidad a lo expuesto, las normas legales citadas y lo señalado en los artículos 768, 786, 806 y 808 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por el abogado Ricardo Reveco Urzúa, en representación de la demandada, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua el cuatro de mayo de dos mil



veintidós, en cuanto se funda en la causal del N° 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil y **se acoge** el señalado arbitrio respecto del motivo previsto en el N° 5 del mencionado precepto legal, reemplazándola por la que se dictará a continuación, sin nueva vista de la causa.

Ténganse por no interpuesto el recurso de casación en el fondo impetrado en el primer otrosí de la referida presentación en contra del antedicho pronunciamiento.

Regístrese.

Redacción de abogado integrante señor Munita L.

N° 20.025-2022

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. Mauricio Silva C., Sr. Jean Pierre Matus A., Sra. María Soledad Melo L. y los Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L. y Sra. Carolina Coppo D.

No firma el Ministro Sr. Matus y la Abogada Integrante Sra. Coppo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, el primero por encontrarse en comisión de servicio y la segunda por encontrarse ausente.

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
MINISTRO
Fecha: 31/07/2023 16:12:30

MARIA SOLEDAD MELO LABRA
MINISTRA
Fecha: 31/07/2023 16:12:30

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 31/07/2023 16:01:38



En Santiago, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, reemplazando el contenido del considerando octavo por lo expresado en el último párrafo del considerando quinto de la sentencia de casación.

Asimismo, en el considerando noveno se elimina la expresión “-declarado extemporáneo-”.

Además, se corrige la numeración de sus fundamentos, pasando los considerandos “décimo séptimo” al “vigésimo sexto” a ser numerados sucesivamente como “décimo quinto” a “vigésimo cuarto”.

Y se tiene además presente:

1.- Que la pretensión de cobro de prestaciones y resarcimiento de perjuicios deducida en autos encuentra fundamento en el incumplimiento contractual que la actora atribuye a la demandada en relación al contrato que esta le adjudicó, luego de una licitación, el 24 de agosto de 2015, para la Prestación de Servicios de Recolección, Transporte y Almacenamiento, Clasificación y Disposición Final de los Residuos Industriales Sólidos Generados por División El Teniente.

El incumplimiento se hizo consistir en diversas circunstancias, pero todas ellas cobran vigor y relevancia a propósito del ejercicio por parte de Codelco de una facultad unilateral de terminación anticipada “sin que existiera una razón fáctica ni contractual para ello”, por cuanto, denuncia la demandante, esa atribución no está prevista en el contrato sino en las Bases Administrativas Generales, las que en este punto resultan inaplicables frente a la convención, porque ésta, además de contemplar causales específicas de terminación que obedecen a motivos diversos a aquella que fue empleada, estableció que cualquier modificación, ya sea en su alcance, plazo o precio, debía ser acordada entre las partes.



Debe puntualizarse, con todo, que no se ha cuestionado el cumplimiento de las formalidades previstas en la cláusula de terminación prevista en las Bases Administrativas Generales.

2º.- Que, como bien concluye el fallo en revisión, la demandada tenía la potestad para poner término anticipado al contrato sub lite, “sin expresión de motivo”, esto es, de conformidad al numeral 11 de la cláusula tercera del contrato y numeral 30 de las Bases Administrativas Generales, instrumentos conocidos por la demandante. Explícitamente el contrato considera en su cláusula tercera que las condiciones para la ejecución de servicio se encuentran contenidas, entre otros documentos, en las aludidas Bases Administrativas Generales, refiriendo en el epílogo de la estipulación contractual, a mayor abundamiento, que todos los documentos citados – entre ellos, las mencionadas bases- son conocidos de las partes y se entienden formar parte integrante del contrato.

La advertencia que a continuación se menciona, en orden a que prevalecerá el contrato ante cualquier discrepancia entre éste y aquellos documentos, no conlleva a la inaplicabilidad de la cláusula de terminación invocada por la actora.

3º.- Que, en efecto, las cláusulas de terminación anticipada previstas en el contrato se refieren a motivos específicos por incumplimientos de Mol Ambiente S.A., asociados a la prohibición de cesión de derechos y obligaciones, de comunicación de cesión de facturas y de desempeño ético y responsabilidad penal de la Ley N° 20.393; no a la opción de resolver de pleno derecho el contrato sin expresión de causa, como lo hace la cláusula 30° de las Bases Administrativas Generales, la que además y a diferencia de sus homónimas contractuales, genera la obligación de pago de las prestaciones e indemnizaciones que allí se indican, no previstas para los casos en que la terminación obedezca a incumplimientos de la contratista.

Tampoco es plausible colegir aquella inaplicabilidad por el hecho de que el contrato señale en su cláusula sexta, relativa al plazo de la convención, que cualquier modificación de contrato, sea en su alcance, plazo o precio, debe ser acordada por las partes, pues la decisión de



terminación anticipada evidentemente no importa una modificación de aquellos parámetros sino que el fin de la relación contractual.

4º.- Que, ahora bien, la cláusula 30º de las Bases Administrativas Generales prevé la facultad de Codelco de resolver de pleno derecho el contrato, “sin expresión de causa”, pero la carta de 20 de Marzo de 2017 mediante la cual un agente de la demandada comunica a la actora el ejercicio de esa atribución contiene un motivo, cual es, el hecho de que *“transcurrido más un año de vigencia, el contrato referido no ha dado los resultados esperados al momento de su formulación, principalmente a raíz de profundas diferencias de interpretación del mismo entre ambas partes y que no han logrado ser zanjadas”*.

5º.- Que en nuestro ordenamiento jurídico no está prohibida la estipulación de una cláusula que permita a las partes reservarse el derecho de poner término unilateralmente al contrato en la oportunidad que estime, no obstante en el contrato se haya convenido un plazo para su vigencia y este no haya transcurrido. La incorporación de semejante potestad obedece a la libertad contractual que admite el artículo 1545 del Código Civil y que en la especie cobra vigencia, en tanto la estipulación fue incorporada al contrato por estar contenida en las Bases Administrativas Generales que la demandante conoció y aceptó en su oportunidad. Ergo, se trata de una manifestación válida de la autonomía privada cuyo ejercicio obedecerá, ciertamente, a la naturaleza del contrato al que accede, tal como también se preceptúa, por ejemplo, en el artículo 2009 del Código Civil, que faculta a cualquiera de las partes a poner fin al contrato “cuando quiera”, derecho que ciertamente obedece a la naturaleza del pacto y que en ese caso se instituye a propósito del arrendamiento de servicios inmateriales.

6º.- Que la cláusula 30º de las Bases Administrativas Generales, interpretada del modo que previenen los artículos 1560 y siguientes del Código Civil, constituye, en rigor, una cláusula de terminación y no de resolución, como en ella se menciona, pues no está establecida para el evento de incumplimiento contractual, sino que obedece a una voluntad unilateral. Ello se advierte por aplicación de las reglas de los artículos 1563



y 1564 del citado código sustantivo, pues las bases también previenen la terminación anticipada en hipótesis distintas, ya de infracción contractual grave –sin derecho a indemnización si el infractor es el contratista-, ya por mutuo acuerdo.

7º.- Que siendo la aludida cláusula 30º una cláusula de terminación unilateral y anticipada que no requiere expresar causa, si en su ejercicio no se manifestara ninguna igualmente sería necesario dilucidar si ha sido invocada de manera racional y desprovista de todo arbitrio. Así lo impone el ordenamiento jurídico, que repudia los excesos en el ejercicio de los derechos subjetivos y que exige que los contratos se ejecuten de buena fe, considerando las legítimas expectativas que para las partes puede generar un contrato de ejecución diferida, como lo es el de autos, sin perjuicio de la discusión que podría suscitarse sobre la asunción del riesgo de quien se viera afectado por el uso de aquella potestad, si ha admitido la validez y eficacia de una estipulación de esas características.

Pero como en la especie sí se aludió a un motivo, aquel examen debe realizarse en torno a la justificación que se dio a conocer.

8º.- Que, como se dijo, Codelco anunció su intención de terminar el contrato aludiendo a la falta de los resultados esperados luego de más de un año de relación contractual, lo que obedecería “principalmente a raíz de profundas diferencias de interpretación del mismo entre ambas partes y que no han logrado ser zanjadas”.

Y esas diferencias no fueron desconocidas por la actora, pues los incumplimientos contractuales que imputó a Codelco se refieren a dos aspectos bien precisos y que denotan la existencia de las aludidas diferencias de interpretación: la falta de pago de los servicios que le fueron prestados, adeudándole ciertos estados de pago (Nros. 15, 16, 16ª, 17, 18 y 19) y por no haber realizado las acciones necesarias para permitirle la comercialización de los residuos.

Y en ambos aspectos se centró el debate.

9º.- Que el informe pericial contable elaborado por Jonathan Guzmán Muñoz da cuenta que el estado de pago N° 15, por \$120.873.054,



fue pagado el 28 de febrero de 2017 con cargo a la factura electrónica N° 1044, por \$112.512.765. El N° 16, por \$99.994.198, fue pagado el 7 de abril de 2017 con cargo a la factura N° 1078, por \$89.501.487. El N° 16ª, por \$15.772.735, no figura facturado ni cancelado. El N° 17, por \$102.528.266, está pagado el 16 de mayo de 2017 con cargo a la factura N° 1098, por \$93.786.225. El N° 18, por \$110.721.056, fue pagado el 30 de junio de 2017 con cargo a la factura N° 1133, por \$100.266.509. El N° 19, por \$36.078.946, se pagó el 17 de noviembre de 2017 con cargo a la factura N° 1163, por \$32.150.392.

Es decir, salvo en un caso en que no se emitió factura, todos los estados de pago han sido objeto de abonos durante la relación contractual o con posterioridad a ella y, con excepción del Estado de Pago N° 19, fueron solucionados antes del inicio del presente juicio, manteniéndose diferencias menores que obedecen a discrepancias sobre el cumplimiento de ciertos hitos que debían encontrarse satisfechos para proceder al pago.

Además, todos los estados de pago aluden, entre los servicios prestados, a saldos por “manejo de chatarra”. Y es esta justamente, al tenor del proceso, la más importante desavenencia que confronta a las partes y que, al decir del testigo de la actora Oscar Vila de la Cruz, constituía la parte del contrato en la que Mol Ambiente haría su utilidad, al punto que el contrato, sin comercialización de chatarra, “terminaba en pérdida todos los meses”.

10°.- Que, en efecto, la comercialización de los residuos industriales es uno de los objetos de la convención y fue tratada en el contrato en el cláusula séptima, disponiendo que Mol Ambiente los comercializaría directamente con Gerdau Aza o los exportaría, conforme a los mecanismos que en cada caso se establecieron para determinar el valor de venta por parte de la demandante y el de compra que debía pagar a Codelco. En cuanto a los demás productos comercializables, se señala que “las partes definirán un procedimiento que permita establecer precios de venta acorde al mercado. Dichos productos no podrán ser comercializados mientras no se



acuerde dicho procedimiento, como una forma de cautelar que el precio de venta vigente esté de acuerdo a mercado”.

El acervo probatorio demuestra que esta principal diferencia que enfrentó a las partes no logró ser zanjada.

11º.- Que así se desprende de los correos electrónicos remitidos por Codelco el 6 y 26 de junio de 2015, documentos que dan cuenta de las distintas instancias que propició para que Mol Ambiente S.A. remitiera los antecedentes necesarios que pudieran determinar el mejor valor de mercado; de la declaración prestada por el administrador del contrato que se analiza en el primitivo fundamento vigésimo tercero del fallo de primer grado y de lo planteado por la propia actora, que admite la existencia de diferencias en cuanto a la interpretación del contrato y las dificultades para determinar el mejor valor de mercado para definir el pago por la comercialización de los residuos, de lo que también dan cuenta las anotaciones en el Libro de Obras.

Lo propio sucede con las probanzas aportadas por la demandante, que demuestran su natural interés en definir aquellos aspectos necesarios para la comercialización, realizando variadas ofertas y proponiendo mesas de trabajo para solucionar esos aspectos, esfuerzos que, en definitiva, no prosperaron por la diferente interpretación que las partes tenían sobre esa materia, como se evidencia en las minutas de las reuniones celebradas el 23 de noviembre de 2016 y 18 de enero de 2017, acompañadas por la actora, en lo relativo a la licitación y precio de la chatarra, sin que se lograra el acuerdo que en este punto el contrato requería.

12º.- Que, en estas condiciones, resulta verosímil la justificación que invocó Codelco para terminar anticipadamente el contrato y, en consecuencia, no se aprecia que el ejercicio de aquella atribución constituya un incumplimiento contractual.

Y como tampoco logró ser demostrado que esa conducta fuese abusiva o arbitraria, que infringiera la convención del modo que reclama la demandante, o, en fin, que el contrato fuese transgredido por los demás



motivos que fueron esgrimidos, la pretensión deducida en juicio no podía prosperar.

Por estas consideraciones, normas citadas, las señaladas en el pronunciamiento en alzada y lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia apelada de veintiuno de septiembre de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Munita L.

N° 20.025-2022

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. Mauricio Silva C., Sr. Jean Pierre Matus A., Sra. María Soledad Melo L. y los Abogados Integrantes Sr. Diego Munita L. y Sra. Carolina Coppo D.

No firma el Ministro Sr. Matus y la Abogada Integrante Sra. Coppo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, el primero por encontrarse en comisión de servicio y la segunda por encontrarse ausente.

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
MINISTRO

Fecha: 31/07/2023 16:12:31

MARIA SOLEDAD MELO LABRA
MINISTRA

Fecha: 31/07/2023 16:12:32

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO

ABOGADO INTEGRANTE

Fecha: 31/07/2023 16:01:39



En Santiago, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

